

Las disputas público-mediáticas en torno a la inflación en la Argentina pre-menemista (1988)*

Public media disputes about inflation in the pre-menemist Argentina (1988)

Hernán Fair

Hernán Fair es Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y docente de la Universidad Nacional de Quilmes y de la Universidad de Buenos Aires, Argentina.

E-mail: herfair@hotmail.com

resumen

La inflación representa uno de los grandes problemas históricos de la Argentina, constituyéndose en motivo central de la crisis de hegemonía del gobierno de Alfonsín y de la posterior emergencia del menemismo y la aplicación del modelo de acumulación neoliberal. El presente trabajo reconstruye y analiza los debates público-mediáticos en torno a este signifiante clave, en el período inmediatamente previo a la emergencia de la hegemonía menemista, en 1988. Tomando como base un marco teórico de análisis político del discurso, se coloca el eje en las cadenas equivalenciales que construyen los actores políticos escenificados en los principales medios gráficos de circulación nacional.

palabras clave

inflación / disputas público-mediáticas / interdiscursividades / análisis político del discurso / Argentina

summary

Inflation is one of the biggest historical problems of Argentina, becoming the central motif of the Alfonsín's government crisis of hegemony and subsequent menemism emergence and implementation of neoliberal accumulation model. This work reconstructs and analyzes the public media debates on this key signifier in the immediately prior period to the emergence of the menemist hegemony, in 1988. Based on a theoretical framework of political discourse analysis, placed the axis on equivalential chains that build political actors staged in principal print media of national circulation.

keywords

inflation / public-media disputes / interdiscursivities / political discourse analysis / Argentina

1. Introducción

La inflación constituyó, históricamente, uno de los grandes problemas de la Argentina contemporánea, siendo motivo de acaloradas disputas políticas e ideológicas que continúan hasta el presente. En los debates académicos, podemos distinguir tres posiciones centrales sobre este tópico. Por un lado, tenemos la visión ortodoxa monetarista, que entiende a la inflación vinculada directamente a la emisión monetaria y el gasto público del Estado (prestaciones sociales, subsidios, salarios, jubilaciones).¹ Por otro lado, encontramos la visión heterodoxa estructuralista, que agrupa a una pluralidad de vertientes que asocian el problema inflacionario a las rigideces en la oferta, la inversión de capital insuficiente, la existencia de mercados concentrados (monopólicos u oligopólicos) y la pugna distributiva entre las fracciones empresariales que fijan los precios, promoviendo la actitud “defensiva” de los trabajadores.² Finalmente, hallamos la visión marxista, que vincula el problema de la inflación a la “lucha de clases” entre el capital y el trabajo.³ En los debates académicos de la Argentina de finales de los años '80, al compás del fracaso de los sucesivos planes de estabilización, y la creciente influencia de las ideas monetaristas, predominaba la visión ortodoxa, que asocia a la inflación a un “exceso de demanda” (Diamand, 1973) y reclama la aplicación de políticas de estabilización macroeconómicas.

En el campo político, tras el fracaso de los planes más heterodoxos del período 1984-1988 (Plan Grinspun, Plan Austral⁴), en agosto de 1988 el gobierno radical, bajo la presidencia de Raúl Alfonsín (1983-1989), implementó un nuevo plan de estabilización, conocido como Plan Primavera, en un intento de controlar los precios por una vía más ortodoxa a la aplicada hasta entonces.⁵ Sin embargo, el plan no era puramente ortodoxo, al mantener una política de control de precios y de concertación neocorporativa con una porción del empresariado industrial, y una regulación del tipo de cambio comercial, que generaría críticas desde diferentes sectores neoliberales (Acuña, 1995; Ortiz y Schorr, 2006; Peralta Ramos, 2007: 224-225; Morresi, 2008: 64). Además, seguían vigentes los tradicionales subsidios al capital concentrado y las políticas de promoción industrial y exenciones impositivas, del mismo modo que las retenciones agropecuarias a la exportación y las históricas juntas reguladoras de precios. Finalmente, pese a que en 1988 el Gobierno extendió el proceso de desregulación y apertura comercial (Viguera, 2000), y envió al Congreso un fallido proyecto de privatización parcial de algunas empresas del Estado (Thwaites Rey, 2003), los planes de reforma estructural sólo eran graduales y ponderados, inscriptos en el marco de una economía mixta. En ese contexto, se presentaba una conjunción de elementos ortodoxos y heterodoxos, monetaristas y estructuralistas.⁶ Se trataba, en ese sentido, de una especie de programa neo-estructuralista, ya que colocaba el eje en el equilibrio macroeconómico, pero orientado a una concepción industrialista-exportadora-“modernizadora” (“tecnologizante”).⁷

A pesar de la creciente sedimentación de las posturas ortodoxas dentro del oficialismo y en el *establishment* local, a fines de los años '80 el tema de la inflación era motivo de fuertes disputas ideológicas entre los diferentes actores políticos

clave, constituyéndose en uno de los significantes “flotantes” (Laclau, 2005) más replicados del período. El siguiente trabajo se propone reconstruir y analizar estos debates, colocando el eje en las disputas público-mediáticas.

1.1. Marco teórico-metodológico

El marco teórico se basa en la perspectiva de análisis político del discurso de Ernesto Laclau (en parte, con Mouffe). Esta perspectiva asume que el orden simbólico construye y organiza lo social, a través de cadenas de significantes que se articulan entre sí de forma “equivalencial” y la construcción de “efectos de frontera” que delimitan “antagonismos”, los cuales actúan como el “exterior discursivo” de las formaciones. A su vez, entiende a lo social como producto de una “lucha hegemónica” por encarnar el “orden comunitario”, que logra estructurarse de forma “parcial”, a través del rol “universalizador” que adquieren los “significantes vacíos”. Finalmente, parte de la base de la radical “contingencia” e “historicidad” que atraviesa el orden social, surcado por la imposibilidad ontológica de su plena constitución (Laclau, 1996, 2005; Laclau y Mouffe, 1987).

Sin embargo, uno de los problemas de la teoría del discurso es que carece de una operacionalización de sus principales categorías (Howarth, 2010). En ese marco, algunos analistas han señalado que los abordajes aplicados suelen hipostasiar al “significante vacío”, estableciendo su primacía de un modo apriorístico (Balsa, 2011). Como una respuesta a estos problemas metodológicos, la presente investigación coloca el eje en el análisis empírico de las “cadenas equivalenciales”, que son aquellas que, en consonancia con la visión lacaniana de las “cadenas significantes” (Lacan, 2006), articulan determinados significantes con una pluralidad contingente de significaciones posibles. Además, como un modo de complejizar el análisis, y reforzar la validez de las afirmaciones, se incluyen algunas herramientas cuantitativas adicionales, vinculadas al conteo de algunas cadenas significantes clave, sin que ello implique caer en un empirismo o un positivismo, ajeno a la perspectiva posfundacional de Laclau.

Para analizar los discursos empíricos se incorpora un triple abordaje: en términos estructurales (sobre el total de los discursos), por actores organizados y por actores individualizados. Se asume, en ese sentido, que los sujetos pueden edificar sus discursos de forma individual o colectiva. A partir de esta premisa, que complejiza los aportes de la teoría de la hegemonía de Laclau, se identifican una serie de actores políticos clave (empresarios, dirigentes políticos, sindicalistas, economistas, periodistas y miembros del *establishment* internacional), siendo considerados de este modo, debido a que sus discursos políticos son replicados con mayor frecuencia en el *corpus* seleccionado.

El recorte del *corpus* incluye el análisis de los discursos público-mediáticos durante el transcurso del año 1988. Este período fue escogido con el objeto de examinar las discursividades en el momento inmediatamente previo a la dislocación que produjo el estallido hiperinflacionario y fiscal de comienzos de 1989, que concluyó con la renuncia anticipada de Raúl Alfonsín, pocos meses después. Las fuentes son la prensa gráfica, en base a la recopilación de un amplio *corpus* de

solicitadas, notas, documentos y entrevistas, referidos al tema de la inflación, en la medida en que estos discursos eran reproducidos en los principales diarios de circulación nacional (*Clarín, La Nación y Página 12*), en 1988. Los medios masivos, en ese sentido, fueron posicionados como espacios privilegiados en los que se escenifican las disputas por la hegemonía.⁸ Sin embargo, al mismo tiempo, se partió de la base que los *mass media* efectúan siempre un determinado recorte de la información, razón por la cual se deben examinar fuentes con posiciones ideológicas diferentes, para acceder a una visión más compleja de las construcciones y disputas hegemónicas. Como una respuesta a ello, se decidió analizar diarios nacionales que presentaban un posicionamiento ideológico heterogéneo, abarcando posiciones de centroizquierda, centro y centroderecha. Finalmente, cabe destacar que los medios gráficos fueron situados también como actores políticos clave. En ese sentido, aunque no se realizó un análisis crítico del discurso mediático, se examinaron las discursividades de las editoriales, que expresan la “voz” oficial del diario, y algunas notas aleatorias de sus principales periodistas.

2. Análisis cuantitativo de las significaciones en torno a la inflación en la Argentina de finales de los años '80

La inflación representa uno de los grandes problemas históricos de la Argentina, constituyéndose en motivo central de la crisis de hegemonía del gobierno de Alfonsín y de la posterior emergencia del menemismo y la aplicación de su modelo de acumulación neoliberal. A finales de los años '80, constituía uno de los significantes clave, mencionado, sobre el total de los discursos, en 130 alocuciones. Sobre el conjunto de las menciones públicas, en el 53,84% de los casos (70 veces), la inflación era vinculada a una crítica al plan económico del gobierno de Alfonsín. En ese marco, la disputa se producía, básicamente, entre dos paquetes de discursos. En primer lugar, una discursividad que podemos definir como ortodoxa, que señalaba las causas monetarias de la inflación, asociándola al incremento de la emisión o el gasto público del Estado y señalando su impacto en el déficit fiscal. En segundo término, una visión más heterodoxa, que se concentraba en los efectos socioeconómicos regresivos de la inflación (reducción de los salarios, aumento de la pobreza y el desempleo), destacando su relación con las políticas de reducción del Estado, el pago de la deuda externa a los acreedores y la especulación financiera.

Con relación a la primera de las discursividades, la cadena equivalencial inflación-déficit fiscal se replicaba en 34 ocasiones, lo que representa el 26,15% de las articulaciones en torno a la inflación y el 58,2% de las asociaciones que reproducen el significativo déficit fiscal (34 veces asociado a ese significativo, sobre un total de 58 menciones).⁹ Con un poco menos de frecuencia (31 ocasiones), se vinculaba equivalencialmente inflación - gasto público, representando el 45,58% de las asociaciones de este significativo (31 encadenamientos a la inflación, sobre 68 menciones al gasto público).¹⁰

En cuanto a las cadenas equivalenciales que vinculan en un mismo esquema inflación-gasto público-déficit fiscal, se hacía presente en 15 oportunidades, repre-

sentando un grado de repique del 11,53%.¹¹ En segundo lugar, se observa la cadena estabilidad-inflación-déficit, que aparece mencionada en 11 ocasiones (8,46%), en particular en discursos técnicos. Desde una modulación más institucionalista, la articulación más frecuente refería a la cadena inflación-reglas claras-certidumbre, reproducida en 20 ocasiones (11,53%), lo que representa el 37,03% de las asociaciones en torno a este significativo (sobre 54 menciones a las reglas claras y la certidumbre, en 20 de ellas aparece esta relación discursiva). Con menor frecuencia, se expresa la frontera inflación-estabilidad, que se menciona en 15 oportunidades (11,53%), representando el 41,66% de los encadenamientos en torno al significativo estabilidad¹² (15, sobre un total de 36).

En los discursos heterodoxos la inflación se replicaba con menor frecuencia y dejaba de asociarse a causas macroeconómicas vinculadas a la intervención del Estado, a partir de la emisión de gasto público, para relacionarse a las políticas liberales y sus efectos sociales regresivos. En ese marco, en la modulación más radicalizada, la cadena equivalencial inflación-bajos salarios se reproducía en 23 ocasiones (17,69%), representando el 34,84% de las asociaciones en torno a este significativo (de 66 menciones a los bajos salarios, 23 veces aparece vinculado críticamente al tema de la inflación).¹³ La cadena equivalencial inflación-marginalización-pobreza, por su parte, se mencionaba en 8 ocasiones (6,15%), representando el 15,68% de las vinculaciones a este significativo (8 sobre 51). Además, con frecuencia se expresaba la frontera política inflación-especulación financiera, replicándose en 23 ocasiones (17,69%), y representando el 28,39% de las vinculaciones en torno al significativo especulación¹⁴ (23 veces sobre 81 citas), mientras que la cadena equivalencial inflación-FMI se hacía presente en 9 ocasiones¹⁵ (sobre 51 menciones al FMI), lo que representa el 17,64% de los discursos referidos a ese significativo. Finalmente, desde una pluralidad de discursos, se escenificaba la frontera política inflación-producción, que era replicada en 41 oportunidades, sobre las 130 menciones a la inflación, lo que representa un porcentaje de repique del 31,53%¹⁶, mientras que la frontera inflación-inversiones se mencionaba en 23 ocasiones, siendo equivalente a un 17,69%.¹⁷

3. Las construcciones y disputas de los actores políticos clave en torno a la inflación

El significativo inflación constituía uno de los tópicos más replicados del año 1988, mencionándose en los discursos de una pluralidad de actores políticos y adquiriendo diversas significaciones. En ese marco, representaba un significativo “flotante”, al ser motivo de una disputa irresuelta por la hegemonía. A continuación, analizaremos estas disputas ideológicas.

3.1. Las construcciones y disputas en torno a la inflación entre los actores político-partidarios

Dentro de la dirigencia político partidaria se presentaban dos discursividades. Por un lado, un discurso ortodoxo, cuyo principal referente era el titular de la Unión de Centro Democrático (UCEDé), Álvaro Alsogaray. Alsogaray se refe-

ría con frecuencia al tema de la inflación (4 menciones sobre 15 discursos), destacando que la Argentina presenta la “tercera inflación del mundo” (*La Nación*, 04/03/88, p. 9). Desde su discurso, la inflación era vinculada al “dirigismo” y el “estatismo” (*Página 12*, 26/05/88, p. 6) y, en particular, a la “emisión espuria de moneda”, que “constituye el peor de los males” del país y que, incluso, en ocasiones era vinculado al “acceso de tendencias marxistas-leninistas” (*La Nación*, 04/03/88, p. 9). La solución al flagelo inflacionario provenía de un “cambio total” del “sistema socioeconómico”, a partir de la liberalización de la economía (*Página 12*, 14/08/88, p. 4).

En las alocuciones del dirigente radical Eduardo Angeloz, perteneciente al ala neoliberal del partido, el tema de la inflación se mencionaba con relativa frecuencia (11 menciones sobre 84 discursos). El Gobernador de Córdoba se presentaba como un correcto administrador, que venía a “administrar” y “gestionar” de modo “eficiente”, desde un discurso tecnocrático, los recursos públicos. Asumiendo un discurso ortodoxo, asociaba la inflación al “populismo”, que “despilfarró” el “gasto público” y genera un crecimiento del “déficit fiscal”, al que vinculaba con el manejo irregular de los fondos públicos por parte de los gobernadores peronistas. Como respuesta, exigía la reducción “significativa” del gasto y la aplicación de las reformas de mercado (*La Nación*, 12/05/88, p. 6; *Página 12*, 09/06/88, p. 2). En sus palabras, “la gestión pública es incompatible con la inflación, la cual es combatida a través de mecanismos liberalizadores de la economía” (*La Nación*, 11/05/88, p. 17). Sin embargo, a diferencia de Alsogaray, Angeloz no llegaba al extremo de reclamar un cambio de todo el modelo económico, manteniendo un discurso ortodoxo menos estructurado.

Entre los funcionarios políticos del Gobierno, el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, mencionaba con relativa frecuencia el tema de la inflación (6 discursos sobre un total de 36). Se refería a la existencia de una “economía inflacionaria” (*La Nación*, 14/03/88, p. 14; *Página 12*, 20/05/88, p. 9), que le generaba “preocupación” (*Clarín*, 15/06/88, p. 16), debido a que producía “sufrimiento” en “los que viven de un sueldo” (*Clarín*, 13-06-88, p. 3) y estaba “golpeando a la gente”.¹⁸ Según el dirigente radical, la inflación era, además de “reaccionaria”, “peligrosa”, ya que podía desencadenar una pérdida de “confianza” en el propio “sistema” democrático:

En este momento no hay nada más reaccionario ni más peligroso que la inflación, ya que contribuye a minar la confianza, no sólo en el Gobierno, sino en la aptitud del sistema para resolver los problemas políticos, económicos y cotidianos (Rodolfo Terragno, *Página 12*, 05/07/88, p. 8).

Como alternativa, exigía “atacar” la “irresponsabilidad” de los gastos del Estado (*La Nación*, 14/03/88, p. 14), a los que asociaba al “déficit fiscal” y a la “irracionalidad del sistema de compras”. Desde su perspectiva, la eliminación de la “ineficiencia” evitaría los efectos negativos de la inflación sobre la “justicia social”

(*La Nación*, 12/05/88, p. 6; *Clarín*, 07/09/88, p. 17). Sin embargo, Terragno no adoptaba un discurso neoliberal, sino que asumía una “modernización”, basada en una apertura “ponderada” y privatizaciones “mixtas”. Ello lo conducía a criticar al Estado, pero también al “monopolio privado” (*Página 12*, 17/04/88, p. 6; *Clarín*, 03/05/88).

Otros funcionarios del Gobierno desvinculaban a la inflación de la emisión monetaria y la puja salarial de los trabajadores, reconociendo, de un modo heterodoxo, su impacto sobre el nivel de las remuneraciones. En esta línea, el Ministro de Trabajo y Seguridad Social señalaba a la inflación como un “enemigo”, que reducía los “salarios”. El aumento de precios respondía, en ese marco, a factores “inerciales”¹⁹:

Quedaron desmentidos los pronósticos que adjudicaban efectos apocalípticos a las paritarias sobre los índices de inflación. En los últimos seis meses el salario no fue un factor de ese flagelo social. La realidad demostró, por el contrario, que eran los salarios los que sufrían los efectos de una inflación creciente y no que las provocaban (...). Al mismo tiempo que se advierte, en los meses pasados, esa diversidad positiva, para intentar una defensa del salario, se pone de manifiesto una negativa uniformidad, cual es el deterioro que la inflación creciente ha venido produciendo en las remuneraciones, cualquiera haya sido el método empleado. Ello tiene una explicación simple: como para negociar reajustes salariales se toman como referencia los índices de precios al consumidor del mes o período anterior, la inflación creciente del mes en que se gastaba el salario, pese al intento de compensar la pasada, se encargaba de deteriorar progresivamente la capacidad adquisitiva de la remuneración cobrada y, consecuentemente, la continua caída del salario real (...). Si a ello le agregamos el deterioro que se produce en el poder de compra durante el mes, o los meses, en que se gasta el salario, fácil es concluir que el mayor enemigo del salario real y de su poder adquisitivo es la tasa de inflación y que no hay método de ajuste sobre la inflación pasada, por ingenioso que sea, que logre vencerla (...). El salario jamás le podrá ganar a la inflación. La única solución sensata es combatir y derrotar rápidamente la inflación. Para ello, y conscientes de que es un enemigo común, es preciso, en lo que a reajustes salariales se refiere, mejorar el método de la negociación y utilizar como base el pronóstico de la inflación futura y no la pasada. Esto permitirá un gradual crecimiento de la capacidad adquisitiva y del nivel del salario real (...). Si la inflación baja se consolida, la expresión “no llego a fin de mes” será reemplazada inicialmente, por la de “gano poco”. Con lo cual no se habrá

solucionado el problema económico, pero habrá disminuido la angustia que genera la inflación, se podrá planear el gasto del salario y, lo más importante, se abrirá la perspectiva de mejorar gradualmente la capacidad adquisitiva y el nivel del salario real (Santiago Tonelli, Ministro de Trabajo y Seguridad Social de la Nación, *La Nación*, 21/09/88, p. 16).

Desde el equipo económico del Gobierno, en cambio, se destacaba la necesidad de reducir el gasto público para terminar con la inflación y el déficit fiscal. En ese marco, Bernardo Grinspun, Secretario de Planificación, y ex Ministro de Economía de Alfonsín (1983-1985), afirmaba que se debían “corregir otros temas fundamentales, como el déficit fiscal”, señalando que “la inflación no se reducirá si no se reduce la expansión monetaria” (*La Nación*, 01/07/88, p. 17). Sin embargo, la propuesta programática no asumía la necesidad de aplicar las reformas estructurales, sino que colocaba el eje en elementos ajenos al neoliberalismo, como la defensa del salario y el nivel de ocupación. En palabras del secretario de Gestión Económica:

Poner límite a una situación que ya se volvía insostenible e inmanejable, a raíz de la aceleración inflacionaria, que podría haber derivado en consecuencias sociales rápidamente predecibles, como son la brusca caída del salario real, problemas de ocupación y la consabida recesión (Jorge Gándara, Secretario de Gestión Económica, *La Nación*, 16/08/88, p. 19).

El ministro de Economía, Juan Sourrouille, reconocía que la inflación era un “flagelo”, señalando que “el principal problema que está detrás de ese fenómeno es el déficit fiscal”. En otros casos, lo vinculaba al incremento “defensivo” de salarios de los trabajadores, sosteniendo que “hay mecanismos de defensa de diversos sectores que, en algunos casos, son legítimos, pero generan inflación” (*Página 12*, 06/04/88, p. 4). Sin embargo, no asumía plenamente las ideas ortodoxas. Así, en otras alocuciones reconocía que “en el comportamiento de los operadores económicos persiste una actitud de defensa frente a la inflación, que hace que todo el mundo remarque por las dudas” (*Página 12*, 26/07/88, p. 7). Con la implementación del Plan Primavera, las ideas ortodoxas se profundizarían. En ese marco, el objetivo del nuevo “plan de ajuste” consistía en “disminuir drásticamente la tasa de inflación, manteniendo los principios del libre negociación en el mercado de trabajo” (*Clarín*, 10/09/88, p. 16). A partir de ese diagnóstico, Sourrouille sostenía la necesidad de “consolidar el proceso antiinflacionario” (*La Nación*, 16/10/88, p. 17). Sin embargo, no aprobaba la liberalización económica, como reclamaban los sectores neoliberales, sino que promovía la realización de un “acuerdo” de precios y una “concertación” con el empresariado y resaltaba la necesidad de “incluir principios de equidad social” (*La Nación*, 18/08/88, p. 15 y 16/10/88, p. 17).

José Luis Machinea, de un modo similar, se refería a la necesidad de mantener la “disciplina monetaria y fiscal” para alcanzar el equilibrio económico y estabilizar la tasa de inflación (*Página 12*, 30/07/88, p. 8). Sin embargo, en el marco del Plan Primavera, el “ajuste” estabilizador debía realizarse mediante un “acuerdo” con el empresariado²⁰ (*Clarín*, 11/09/88, p. 3). En sus palabras:

La administración está comprometida a concretar el ajuste de las cuentas públicas y en esta materia ya no hay lugar para libertades, concesiones y desvíos. (Para ello) se ha instrumentado un acuerdo con organizaciones empresariales destinado a estabilizar los precios, en un marco de consenso y de responsabilidad, y tampoco aquí hay lugar para abusos individuales o arreglos particulares que no contemplen el objetivo global de la estabilización. Se trata de hacer un sustancial control sobre la expansión monetaria (José Luis Machinea, *Clarín*, 01/09/88, p. 3).

Adolfo Canitrot, otro de los funcionarios claves del área económica, sostenía, en cambio, que “el déficit controlado no es una garantía de que bajará la inflación, por los efectos inerciales que la impulsan” (*Página 12*, 04/06/88, p. 3). Finalmente, desde las alocuciones de Alfonsín, curiosamente, el tema de la inflación ocupaba un lugar marginal. De hecho, hallamos una única referencia directa a este significativo, al que relacionaba con el aumento de precios que realizan los empresarios (*Clarín*, 12/05/88, p. 7). Desde el discurso presidencial, el acuerdo de precios con el empresariado industrial, en el marco del Plan Primavera, constituía una “alianza entre la producción y la democracia”. Sin embargo, al mismo tiempo asumía una “decidida voluntad de actuar con austeridad y con una cada vez mayor disciplina fiscal” (*Página 12*, 13/08/88, p. 3).

En las fuerzas de oposición política la inflación tampoco se mencionaba con frecuencia. Así, mientras que el tema sólo aparecía en un discurso del Gobernador de Buenos Aires, el peronista renovador Antonio Cafiero, quien acusaba a Carlos Menem, por entonces Gobernador riojano, de tener una inflación de 46.000% en su provincia (*Clarín*, 10/05/88, p. 2), no se hacía presente en otros referentes justicialistas, con la excepción del dirigente cordobés José Manuel De la Sota, quien relacionaba el plan económico al “pago de la deuda externa” y destacaba los efectos de la inflación sobre los “salarios nominales”²¹ (*Clarín*, 14/05/88, p. 7).

Sin embargo, desde los documentos conjuntos de los gobernadores del justicialismo, junto a la crítica a la recesión y la “caída de los niveles salariales”, se destacaba la reducción “unilateral de los recursos financieros de las provincias, las que se encuentran hoy al borde de la quiebra” (*La Nación*, 16/09/88, p. 10). De este modo, se respondía a las diatribas neoliberales, que asociaban la inflación con el despilfarro de los recursos públicos por parte las administraciones a cargo del justicialismo (*Página 12*, 24/04/88, pp. 10-11; *La Nación*, 21/10/88, p. 7). Los Ministros de Economía de las provincias gobernadas por el PJ, por su parte, criti-

caban la “política monetaria y fiscal” del Gobierno, aunque sin reclamar aumentos salariales o del gasto público (*Clarín*, 31/03/88, p. 18).

3.2. Las construcciones y disputas en torno a la inflación en el sindicalismo

A diferencia de los referentes político-partidarios, dentro del sindicalismo la inflación representaba un tema central y predominaba ampliamente una concepción heterodoxa del problema, centrada en sus efectos sociales sobre los asalariados. En ese marco, con frecuencia la Confederación General del Trabajo (CGT) criticaba a la inflación en base a sus efectos “socioeconómicos” regresivos sobre los “trabajadores”. En un contexto de índices inflacionarios en ascenso, la CGT destacaba que la suba de precios “castiga al pueblo” (*Clarín*, 04/04/88, p. 4), produciendo un “encarecimiento incesante de la canasta familiar”, lo que provoca “recesión” (*Clarín*, 13/09/88, p. 2). Desde los discursos de la central sindical, la inflación se vinculaba de forma estrecha a las políticas económicas del Gobierno, que provocaban un “crecimiento alarmante de la desocupación”, una “declinación constante del poder adquisitivo del salario”, una “disminución insana del consumo” y un incremento de la “especulación”, fomentando una “inevitable recesión”:

Desde un comienzo hemos denunciado que la metodología elegida por el Gobierno para sanear la inflación no era la correcta, precisamente porque no corregía el mal, porque provocaba un aumento alarmante de la desocupación, una declinación constante del poder adquisitivo del salario, una disminución insana del consumo y una inevitable recesión (...). La remaración de los precios, admitida oficialmente, desdibuja aceleradamente toda posible recomposición del salario, desbordado en horas por la especulación (...). La actual crisis es el resultado del manejo autoritario y arbitrario de la economía (CGT, documento firmado por Saúl Ubaldini, *La Nación*, 28/08/88, p. 14).

El histórico líder de la central sindical, el dirigente cervecero Saúl Ubaldini²², asociaba la “agudización del proceso inflacionario” con la “degradación del nivel de vida de los trabajadores activos, jubilados y pensionados y la reducción de las fuentes de trabajo” (*Página 12*, 04/05/88, p. 7 y 16/06/88, p. 2). Asumiendo una concepción movimientista-populista, reclamaba incrementos salariales (*Página 12*, 22/03/88, p. 7 y 20/08/88, p. 3), vinculando al plan económico a una “política hambreadora” (*Página 12*, 17/08/88, p. 3), que era contraria a los “derechos” de los “trabajadores” y al objetivo de alcanzar una “democracia” con “justicia social” (*Clarín*, 31/09/88, p. 9). En otros casos, la inflación se relacionaba a una “política socioeconómica oficial de hambre y de dependencia”, que promovía “nuevas confrontaciones” (*Clarín*, 08/07/88, p. 4).

En las alocuciones de la CGT en las que no participaba Ubaldini con su firma, las críticas se centraban en la “especulación”, relacionada, a su vez, a “sectores privilegiados que se intenta favorecer” (*La Nación*, 26/08/88, p. 10). En ese marco, el titular del gremio automotor de SMATA, José Rodríguez, edificaba una frontera política entre la inflación, vinculada al pago de la deuda externa y la “cultura de la especulación”, y relacionada de modo equivalencial a los “intereses” y “negocios” del “Fondo Monetario” y los “acreedores” externos, frente a la defensa de la “producción” y el “salario”, asociados a la defensa de los “intereses nacionales”:

(Se debe) discutir sobre una base de crecimiento interno, tanto de la producción como de los niveles salariales, y no tener en cuenta únicamente lo que surja de la negociación con los acreedores externos (...). Hay que discutir sobre la base de terminar con la inflación y pasar de una cultura de la especulación a una cultura de la producción. Para alcanzar esos objetivos, hay que pensar en los intereses del país y no en el muy bien 10 del Fondo Monetario. Hay que tener presentes los intereses nacionales (José Rodríguez, SMATA, *Página 12*, 29/07/88, p. 3).

Otros sectores del sindicalismo, entre ellos la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), también vinculaban la inflación con los “bajos salarios” de los “trabajadores” (*Página 12*, 05/08/88, p. 11, 17/08/88, p. 3 y 16/09/88, p. 4). Sin embargo, en el caso de la UOM, modulaba hacia una discursividad productivista-nacional, enfatizando en la contraposición producción-trabajo vs. inflación-especulación, frente a la cadena equivalencial pobreza-marginación-desigualdad-bajos salarios vs. inflación, típica de los referentes radicalizados de los gremios estatales. En todos los casos, pese a las divergencias, lo interesante es que no se cuestionaba la tesis ortodoxa, que sostenía que el aumento de salarios generaba inflación. Además, tampoco se vinculaba al papel de los empresarios con el aumento de los precios. Finalmente, bajo esta aceptación implícita de las premisas centrales de la ortodoxia, no se proponía una solución alternativa al problema inflacionario. De este modo, se asumía una posición de respuesta defensiva frente a los efectos regresivos de la inflación.

3.3. Las construcciones y disputas en torno a la inflación entre los economistas y miembros del *establishment* internacional

En las alocuciones de los economistas, financistas y tecnócratas del *establishment* local e internacional, predominaban ampliamente los discursos ortodoxos, que asociaban la inflación a la intervención del Estado, vía emisión de moneda, reclamando estabilizar la economía mediante la restricción monetaria y el equilibrio fiscal:

El problema central es el equilibrio presupuestario. Aunque el desarrollo económico fue suficientemente bueno como para consolidar la democracia, los continuos saltos de la inflación demuestran la falta de equilibrio en el presupuesto (Rudiger Dornbusch, entrevista en *La Nación*, 30/08/88, p. 20).

En ese marco, desde el *establishment* internacional, se asociaba la inflación con la “ineficiencia”, el “desequilibrio”, el “desborde” de las cuentas fiscales y, en ocasiones, la pérdida de “confianza” en la moneda local²³:

La Argentina está al borde de la hiperinflación, debido a la ineficiencia de su economía, los desequilibrios estructurales en su presupuesto y la menguante confianza en el austral (Diario “Wall Street Journal”, en *La Nación*, 02/07/88, p. 17).

El rebrote inflacionario se asocia siempre estrechamente al desborde de la política fiscal (Documento de técnicos del Banco Mundial, *Clarín*, 05/04/88, p. 28).

Con frecuencia, estos discursos buscaban aunar “esfuerzos para derrotar la inflación”²⁴, lo que implicaba realizar una “verdadera reforma del Estado”²⁵, a riesgo de que, de lo contrario, el plan económico no lograra frenar la suba de precios.²⁶ De este modo, se asumía un discurso típicamente neoliberal, que articulaba los ajustes estabilizadores con las reformas estructurales.

3.4. Las construcciones y disputas en torno a la inflación en los actores mediáticos

Entre los referentes mediáticos, el tema de la inflación también era motivo de importantes divergencias. Desde las editoriales de *La Nación* se asumía una postura ortodoxa. Adoptando una modalidad enunciativa tecnocrática (Verón, 1995), centrada en componentes didácticos y explicativos, se destacaba asertivamente la relación causal entre emisión monetaria e inflación:

Es una verdad irrefutable la estrecha conexión existente entre la cantidad de dinero, la demanda monetaria y la evolución de los precios (“Aspectos monetarios de la estabilización”, editorial de *La Nación*, 22/08/88, p. 8).

En ese marco, el diario liberal-conservador reclamaba reducir el déficit del Estado mediante una rebaja más profunda del gasto público. Ello lo conducía a criticar la “tibieza” del Plan Primavera, un “programa antiinflacionario” que era “insuficiente” para solucionar el problema inflacionario²⁷:

Reducir el insostenible desequilibrio del sector público es uno de los elementos sustanciales del esquema de estabilización puesto en marcha por el gobierno, en vista de la altura abrumadora que llegó la inflación en los últimos meses (...). Como en otras oportunidades, la búsqueda del equilibrio se sustenta, primordialmente, sobre la obtención de un mayor caudal de recursos del sector privado, y sólo complementariamente, en la reducción del gasto. En realidad, los recortes en las expensas fiscales no están del todo ausentes en el esquema, pero sus resultados previsibles no prometen mucho (“Las medidas tomadas en el sector público”, editorial de *La Nación*, 23/08/88, p. 8).

En las editoriales del diario *Clarín* la inflación era mencionada con frecuencia (8 discursos sobre 34 relevados), asociada a “incertidumbres y limitaciones” (*Clarín*, 01/09/88, p. 16). En ocasiones, se rechazaba el diagnóstico neoliberal, que indica que la reducción inflacionaria podría provenir de “severas restricciones” en las políticas monetarias. En cambio, se vinculaba el aumento de precios con la especulación financiera y sus efectos en la caída de la inversión productiva y el nivel de empleo (*Clarín*, 12/09/88, p. 14):

La conducción económica está apelando, con particular intensidad, a la política de enfrentar las presiones especulativas con una severa restricción monetaria (...). La resultante de esta política, que, en principio, apunta a contener la especulación cambiaria y las expectativas de inflación, es promover las inversiones financieras, en desmedro de las productivas. Las mismas empresas se ven impulsadas a reducir sus volúmenes de producción para hacerse de capitales líquidos que les permitan obtener diferencias (...). Las consecuencias de estas estrategias son conocidas. Se traducen en falta de aliciente para la inversión, volúmenes decrecientes de producción y caída en el nivel de empleo (...). Por otra parte, la experiencia de los últimos años parece indicar, reiteradamente, que este tipo de estrategia resulta completamente ineficaz para contener las expectativas inflacionarias. La asfixia monetaria sólo logra generar un clima artificial en los mercados, durante el cual se acumulan tensiones que suelen estallar luego con fuerza inusitada (“El manejo monetario”, editorial de *Clarín*, 20/03/88, p. 18).

En otros discursos del matutino, sin embargo, se destacaba “la necesidad de iniciar sin demoras el tratamiento profundo del problema inflacionario”, lo que implicaba abandonar “todo procedimiento de control de los precios”. En ese mar-

co, se exigía el “reordenamiento y redimensionamiento del Estado, que permitiera reducir sus gastos, concentrándose en los prioritarios para el crecimiento y bienestar social”.²⁸ En ese sentido, se sostenía que “las finanzas del Estado siguen en cuestión (...), lo cual afecta las negociaciones con los acreedores externos y no ofrece buenas perspectivas para la marcha de la inflación”.²⁹ Sin embargo, las críticas no se traducían en la adopción de la tesis monetarista, ni en el reclamo por aplicar las reformas estructurales del paradigma neoliberal.

3.5. Las construcciones y debates sobre la inflación en el campo empresarial

Entre los referentes empresariales se presentaban reiteradas críticas a la inflación, definida como “endémica”³⁰ o “estructural”.³¹ Con mucha frecuencia, se asumía la visión ortodoxa. En ese marco, se criticaban los “infructuosos planes antiinflacionarios” y se asociaba la “persistente” inflación al “déficit fiscal”³², la “elevada presión impositiva” y el “abultado gasto público”.³³ Los dirigentes de las organizaciones rurales más importantes, entre ellas la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), también relacionaban la inflación a la emisión de moneda, que genera déficit fiscal.³⁴ Además, frente a las políticas acuerdistas del Plan Primavera, la SRA reclamaba con insistencia la “libertad de precios y salarios”, la “liberación de los mercados cambiarios” y el “libre juego de las tasas de interés”, agregando, en ocasiones, el reclamo por la “desregulación de las actividades financieras” y la “apertura de la economía” (*Página 12*, 14/08/88, pp. 2-3). En los discursos de la Confederación Rural Argentina (CRA), se destacaba también la necesidad de “reducir drásticamente la dimensión del Estado”, criticando al plan económico del Gobierno por “discriminar” al agro. Además, se reclamaba la “reducción drástica” del Estado para generar una mayor “confianza” en el “hombre de campo”, de modo tal de promover el “crecimiento” económico:

El Gobierno se equivoca si pretende bajar la inflación sin reducir drásticamente la dimensión del Estado, a la vez que favorece a aquellos segmentos de la sociedad que tienen sobrados mecanismos para trasladar los costos a sus precios (...). Tengan la seguridad de que el movimiento confederado, con sus filiales más estrechas que nunca, no claudicará hasta que se revierta la injusta situación impuesta, única alternativa que devolverá la fe al hombre de campo y con ella, motorizar el crecimiento del país (Benito Legerén, presidente de CRA, *La Nación*, 22/08/88, p. 16).

Los documentos de la Unión Industrial Argentina (UIA) también relacionaban la inflación con el “gasto público” y la “ineficiencia” de las empresas públicas y exigían el control del déficit y la reducción del gasto estatal.³⁵ El presidente de la entidad, Gilberto Montagna, destacaba, en ese sentido, la necesidad de implemen-

tar “medidas de fondo que nos permitan pensar que acá se está atacando el gasto público para notar el descenso de la inflación” (*Página 12*, 20/08/88, p. 4). En otros casos, vinculaba la inflación a los conflictos distributivos, junto a la crisis fiscal y comercial del sector externo (*Clarín*, 23/03/88, pp. 18).

El Grupo de los 17, que reunía a los grandes empresarios de las principales corporaciones, se refería, de un modo similar, al “recrudescimiento de la inflación”, asociado al “elevado nivel del gasto público”, y reclamaba una “reducción del gasto público y del déficit fiscal. Sin embargo, esas medidas sólo constituían un punto de partida para la implementación de un “plan global”, que debía “atacar” las “causas profundas de la decadencia en la que se ha sumido la economía argentina” (*Página 12*, 06/04/88, p. 4). En ese marco, frente al programa económico del Gobierno, reclamaba un tipo de cambio basado en “un mercado único y libre” y “la eliminación total y definitiva del régimen de control de precios” (*Página 12*, 19/04/88, p. 4). En la misma sintonía, la Cámara Argentina de la Construcción (CACon) asociaba la inflación a la necesidad de “reducción sistemática del déficit público” y la desregulación comercial. En ese contexto, reclamaba profundizar la “libertad de comercio”, “exhortando a que la tendencia desreguladora se consolide y se resuelva la liberación total y definitiva de los precios y márgenes” (*Clarín*, 09/04/88, p. 18).

En otros discursos, de menor frecuencia y peso político, se presentaba una concepción heterodoxa. En ese contexto, el titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), entidad que nuclea a los pequeños y medianos productores rurales, destacaba la relación causal entre el “plan de ajuste” del Gobierno y el “agravamiento” del “proceso inflacionario:

Con el discurso de Alfonsín se ratifica que se continuarán políticas de ajustes, que sólo servirán para agravar el agudo proceso inflacionario en el cual se encuentra sumergido el país (Humberto Volando, FAA, *Clarín*, 03/05/88, p. 2).

No obstante, el más importante referente empresarial que promovía un discurso heterodoxo era el vicepresidente de la UIA, Arnaldo Etchart.³⁶ Desde una modulación productivista nacional, Etchart asociaba al plan económico del Gobierno con la adopción del liberalismo ortodoxo, lo que afectaba a la “producción”, el “trabajo” y la “inversión”:

El principal problema es que el discurso de Alfonsín refleja que el Gobierno acepta una visión de la economía y de la inflación totalmente ortodoxa y liberal, cuando la economía productiva tiene la experiencia de que esas estrategias lo único que hacen es castigar a la producción, a los asalariados y a la inversión, agudizando las tensiones sociales (Arnaldo Etchart, UIA, *Clarín*, 03/05/88, p. 2).

Desde las Pymes se presentaba una variante más mercado-internista, que se oponía también a “una política fiscal desprovista de toda consideración” y favorable a la “especulación financiera”. A su vez, resaltaba los efectos negativos de la inflación sobre la “gente” que, de este modo, “no compra”, afectando “la supervivencia de los sectores de ingresos fijos, de la pequeña y mediana empresa, comerciantes, y productores agropecuarios”.³⁷ En ese marco, desde los documentos organizacionales de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), se criticaban las “altas tasas de inflación” y las “políticas recesivas” (*Página 12*, 04/10/88, p. 4), destacando, en un discurso de escasa circulación, que la inflación era generada por las empresas monopólicas (*Página 12*, 07/10/88, p. 8).

Por último, en algunos casos, como en la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), se presentaba un discurso ambiguo. Por un lado, se destacaba que “la inflación deteriora el poder adquisitivo del salario y deprime el mercado interno, perjudicando al empresariado comercial con la caída de la demanda y el constante aumento de los costos de reposición” (*La Nación*, 04/07/88, p. 16). Al mismo tiempo, sin embargo, se relacionaba la “espiral inflacionaria” con la imposibilidad de distribuir el ingreso, resaltando que “la vía de distribuir lo que no existe, urdiendo nuevos impuestos para acudir a los sectores más carenciados”, termina en el “despojo” de la “inflación descontrolada” (*La Nación*, 09/05/88, p. 16). En ese marco, se partía desde el relato neoliberal de la inflación, vinculando al Estado con una “emisión” monetaria y un “sector público ineficiente, caro y deficitario”, que genera “siempre inflación”, para “mal de obreros y empresarios” (*La Nación*, 04/07/88, p. 16). La propuesta, en ese sentido, consistía en implementar “medidas concretas y eficaces” para “reducir drásticamente el gasto público improductivo” (*Clarín*, 09/05/88, p. 19).

4. Conclusiones

Analizamos en este trabajo las disputas hegemónicas en torno al significativo inflación en los discursos público-mediáticos de los actores políticos clave de la Argentina de finales de los años '80. Agrupando la contingencia de los discursos de acuerdo a sus regularidades estructurales, podemos decir que, en 1988, persistía una fuerte disputa hegemónica entre tres macro-discursividades, en un debate que incluía a referentes del conjunto de las organizaciones políticas más importantes. Por un lado, se hacía presente una concepción ortodoxa monetarista, que asociaba la inflación a la cadena equivalencial emisión de gasto público del Estado y déficit fiscal. Desde esta visión, las políticas de estabilización debían complementarse con las reformas estructurales, eliminando los controles de precios del Gobierno, privatizando las empresas públicas y liberalizando completamente la economía. Sus principales exponentes eran la Sociedad Rural, la Confederación Rural, los grandes empresarios nucleados en los coloquios de IDEA, Álvaro Alsogaray y los principales economistas y miembros del *establishment* local e internacional (entre ellos, los acreedores externos). Estos referentes expresaban un antagonismo fuerte con el Gobierno, buscando realizar un cambio global en el modelo económico y social, para concluir con la inflación y el déficit fiscal y equilibrar la economía. En

un escalón más abajo, Eduardo Angeloz, la Cámara Argentina de la Construcción y la Cámara Argentina del Comercio, junto a los discursos de *La Nación*, también reclamaban profundizar el ajuste monetario y fiscal y liberalizar la economía, aunque de un modo más ponderado y gradual.

En segundo término, hallamos un macro-discurso heterodoxo, de matriz estructuralista, que presentaba dos modulaciones. La primera, movimientista-populista, asociaba la inflación a sus efectos regresivos sobre los derechos sociales y laborales de los trabajadores, criticando el incremento de la pobreza, el desempleo y la reducción de los salarios. Con frecuencia, la crítica a la inflación se encadenaba a las políticas económicas del Gobierno, vinculadas a la especulación financiera y al privilegio hacia los intereses anti-nacionales de los acreedores externos. Como propuesta alternativa, reclamaba aumentos de salarios para el pueblo trabajador. La segunda, que denominamos productivista nacional, colocaba el eje en la defensa de la producción y la industria nacional, las inversiones y, en ocasiones, el mercado interno, criticando las políticas económicas del oficialismo por promover la especulación financiera y afectar la producción nacional, aunque relegando las críticas a los aspectos sociales. Los principales exponentes de la primera modulación eran la CGT y la mayoría de sus integrantes, incluyendo a su líder, Saúl Ubaldini, y a los gremios estatales. El reclamo por un mayor gasto público, vinculado a la coparticipación de ingresos a las provincias, era liderado por los gobernadores del justicialismo.

En cuanto a la visión productivista nacional, se presentaba en algunos exponentes de la UIA (en particular, en los discursos de su Vicepresidente) y en las editoriales de *Clarín*, mientras que en sectores de la Apyme adquiría una visión más mercado-internista. En el caso de la UOM y algunos gremios de esa entidad, la concepción productivista nacional se articulaba con algunos elementos de la doctrina nacional popular peronista, ausentes en los discursos de la UIA y de *Clarín*.

Sin embargo, lo más interesante es que estos discursos críticos no cuestionaban la tesis monetarista que vinculaba el aumento de salarios y del gasto público a la inflación. Además, no lograban estructurar una respuesta política alternativa, que brindara una solución efectiva frente al problema inflacionario. De este modo, sus principales referentes actuaban de un modo predominantemente defensivo, centrando sus críticas en los efectos regresivos de la inflación sobre los derechos sociales y laborales de los trabajadores y sobre la producción nacional, aunque sin poder elaborar una alternativa heterodoxa. Así, sólo en discursos aislados de Apyme, con inexistente influencia política, mediática, social y electoral, se afirmaba que la inflación era causada por los empresarios, a partir del aumento oligopólico de los precios. Sin embargo, no hemos hallado discursos que defiendan el déficit fiscal, tal como lo hace la teoría keynesiana. En ese marco, pese a que los actores políticos no aceptaban los presupuestos básicos de la visión monetarista, tampoco los cuestionaban públicamente. Pero sobre todo, en el contexto de fracaso de los planes heterodoxos ensayados entre 1984 y 1988, los discursos críticos no lograban edificar una alternativa concreta para

hacer frente a este tema crucial para la defensa de los derechos sociales de los trabajadores.

Finalmente, en un punto de intersección, identificamos un tercer paquete de discursos diferencial. Esta discursividad, cuyos principales exponentes formaban parte de la cartera económica del gobierno de Alfonsín, aceptaba los ejes centrales de la crítica ortodoxa a la inflación, vinculada al gasto público y el déficit fiscal, y destacaba con insistencia la necesidad de estabilizar la economía. Sin embargo, al mismo tiempo rechazaba las propuestas del *establishment* de desregular los precios y el tipo de cambio y aplicar las reformas neoliberales. En ese marco, defendía el acuerdo de precios con una porción del empresariado industrial y un mercado de cambios regulado, conservando la política de subsidios y regímenes de promoción industrial para los grupos económicos y las retenciones agropecuarias. Además, aunque fomentaba una política de desregulación y apertura comercial, la misma sólo debía ser gradual o parcial, al tiempo que promovía una serie de privatizaciones mixtas, rechazando tanto las posturas estatistas como las privatistas.

Los principales referentes políticos de esta discursividad estructuraban un discurso que definimos como modernizador-tecnologizante, ya que se orientaba a la incorporación de tecnología e inversiones externas para promover la exportación industrial, fomentar la producción y, de este modo, alcanzar el desarrollo, la modernización y la estabilidad macroeconómica.

Esta discursividad mixta, cercana a las ideas neo-estructuralistas, era atacada fuertemente por los discursos ortodoxos neoliberales, en particular por la Sociedad Rural y por Alsogaray, que lo vinculaban a un programa de reformas demasiado tibio, que mantenía la intervención ilegítima del Estado en la economía. Estos actores reclamaban un cambio global del sistema socioeconómico, que debía liberalizar y privatizar la economía, eliminando los subsidios, las retenciones agropecuarias y los controles de precios, desmonopolizando a las empresas públicas, desregulando y abriendo la economía y reduciendo de manera efectiva el gasto público con una política monetaria y fiscal restrictiva. De este modo, al igual que en los exponentes más radicalizados del nacionalismo popular, estos referentes rechazaban de forma conjunta las políticas económicas del Gobierno.

Como hemos podido observar, a finales de los años '80 persistía una fuerte disputa político-ideológica en torno al significativo aumento de la inflación, a partir de una crítica compartida al incremento de los precios y a sus efectos macroeconómicos y/o sociales. Unos años después, luego de vivenciar el estallido hiperinflacionario de 1989, el fracaso de los sucesivos planes de estabilización del período 1989-1991, y el notable éxito del régimen de Convertibilidad para estabilizar la economía, el menemismo lograría transformar a la mayor parte de los discursos heterodoxos (entre ellos, a la CGT, la estructura partidaria del PJ, la UIA y el diario *Clarín*), en firmes defensores de la estabilidad monetaria y las políticas neoliberales. En otros casos, se mantendrían fuertes críticas al modelo de acumulación, pero que no cuestionaban la estabilidad.

En el marco de una estabilización efectiva de los precios que se extendió durante diez largos años, la fantasía del 1 a 1 lograría “solucionar” el problema inflacionario, reprimiendo de la disputa hegemónica a las posturas alternativas a la ortodoxia y convirtiendo en tabú toda posibilidad de devaluar la moneda y salir del esquema de paridad monetaria fija. Tendremos que esperar recién al sorpresivo derrumbe del modelo de Convertibilidad, a finales del 2001, para que las posturas heterodoxas estructuralistas pudieran retornar lentamente al centro de la escena pública.



Referencias

* La presente investigación se inscribe en el marco de mi Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, marzo de 2013.

1. La teoría monetarista presenta largos antecedentes históricos, aunque su más firme desarrollo remite a la Escuela de Chicago, una vertiente neoliberal liderada por Milton Friedman y Jorge Stigler, que coloca el eje en la crítica a la emisión monetaria y el gasto público del Estado, como causantes de la inflación y el déficit fiscal, y reclama la reducción del gasto social y la restricción monetaria para equilibrar la economía (Krikorián, 2010: 535; Morresi, 2008: 23-25). Para una aplicación de esta concepción al caso argentino en los años '90, véase Llach (1997).
2. La heterodoxia contiene variadas perspectivas (estructuralistas, neoestructuralistas, keynesianos, neokeynesianos, post-keynesianos, dependentistas, etc.), que comparten la crítica al libre mercado y la defensa de la intervención del Estado en la economía (Aronskind, 2008: 44). La visión estructuralista tiene un origen común en la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), y vincula la inflación con la estructura o composición de la demanda y la oferta de bienes. En ese marco, hace hincapié en el control oligopólico de los precios por parte del empresariado y en las pujas distributivas entre las fracciones empresariales, en el marco de la estructura oligopólica de la economía (Heredia, 2006: 181). Para una aplicación de la visión heterodoxa (neo) estructuralista, véase Castellani (2002).
3. Para un abordaje de la concepción marxista, desde una perspectiva que discute con las otras dos teorías, véase Bonnet (2008: 157 y ss.).
4. Cabe destacar que entre ambos planes habrá un creciente corrimiento, incluso en el lenguaje de los discursos, hacia la ortodoxia económica, sobre todo a partir de 1985, y desde 1987 (Beltrán, 2006; Heredia, 2006).
5. Las principales medidas consistían en el aumento de 30% en las tarifas y 25% en los salarios de la administración pública, devaluación de 11,42% del austral, manteniendo el dólar bajo y altas tasas de interés, congelamiento de precios por 180 días con unas 400 o 500 grandes empresas vinculadas a los sectores liberales de la UIA y la CAC, y un desdoblamiento del tipo de cambio entre un mercado regulado para los exportadores y el comercio (con un esquema *crawling peg* de devaluaciones decrecientes de acuerdo a la tasa de inflación del mes anterior, menos dos puntos) y otro desregulado para los importadores y especuladores del sector financiero (flotando en un 20 a 25% por encima, lo que implicaba un gravamen encubierto a los agroexportadores). Además, se planteaba una apertura económica mediante reducción de aranceles a la importación, un recorte del IVA del 3%, reducción del gasto y racionalización administrativa, a partir de la eliminación de reparticiones públicas. Finalmente, el plan era acompañado por un proceso de desregulación gradual en las áreas petrolera, siderúrgica, papelera y petroquímica y un proyecto de privatización mixta de Aerolíneas Argentinas y otras empresas estatales (*Página 12*, 20/08/88, p. 2). Sobre el particular, véanse Ortiz y Schorr (2006); Peralta Ramos (2007: 223-226); Bonnet (2008: 184-185). Acerca del “pacto corporativo” y los vaivenes entre el Gobierno y los empresarios industriales líderes, véase Acuña (1995: 321-355).
6. Como lo resumirá el ministro de Obras y Servicios Públicos, Rodolfo Terragno, “la nueva estrategia de expansión y crecimiento deberá incorporar el pensamiento estructural a los programas

de desarrollo de la teoría monetarista, y ello para encarar un problema crucial, y que consiste en lograr una conveniente acumulación de capital, en especial para afrontar las limitaciones que surgen de la gravosa deuda externa” (*La Nación*, 13/05/88, p. 17).

7. En este sentido, en los discursos de Terragno, Sourrouille y Alfonsín, pese a sus divergencias, se presentaba una crítica al neoliberalismo y su lógica “privatista”, desde una concepción que apelaba a algunos significantes típicos del discurso estructuralista-desarrollista, como el énfasis en la “modernización” y el “desarrollo” y la incorporación de “tecnología” e “inversiones externas” para promover la exportación industrial. Al mismo tiempo, no obstante, se enfatizaba en el objetivo de la estabilización monetaria y fiscal y en la crítica al “estatismo”.

8. Sobre la escena mediática como plataforma de análisis del discurso, véase Fonte (2008).

9. Se destacan, en ese marco, 3 discursos de Angeloz que efectúan esa vinculación.

10. Se destacan, en ese marco, las editoriales de *La Nación*, con 4 menciones a esa cadena.

11. Se destacan 4 discursos de la Sociedad Rural, 2 del Banco Mundial y 2 de técnicos del gobierno radical.

12. Esta cadena se presenta en referentes técnicos, incluyendo a economistas, algunos empresarios y miembros del *establishment* internacional.

13. Se destacan 4 editoriales de *Clarín* y 4 documentos de la CGT firmados por su titular, Saúl Ubaldini.

14. Se destacan 3 documentos de la CGT firmados por Ubaldini.

15. Dos de ellas, presentes en el discurso de Ubaldini.

16. Se destacan las editoriales del diario *Clarín*, con 6 menciones.

17. Se destacan las editoriales de *Clarín*, con 5 menciones.

18. Igualmente, Terragno defendía el incremento de tarifas, afirmando que “son inevitables, porque hay inflación” (*Clarín*, 13/06/88). En la misma línea, véase también el Comunicado de Ministerio de Obras y Servicios Públicos (*Clarín*, 15/06/88, p. 16).

19. La inflación inercial se sitúa dentro de una postura heterodoxa sobre el problema inflacionario, que señala la existencia de la indexación de contratos como factor de “inercia” de los precios, en el momento en que se reproducen a futuro los niveles alcanzados en el pasado (Aronskind, 2008: 84-85). Sobre la inflación por inercia, véase Frenkel (1989).

20. El dirigente radical Marcelo Stubrin coincidía, poco antes, que el “acuerdo sectorial” era “necesario para bajar los precios” (*Página 12*, 19/07/88, p. 2).

21. Esta concepción heterodoxa se replicaba desde los discursos marginales de la Juventud Radical, que relacionaban la inflación con el drenaje de divisas y asumían la propuesta peronista de no pagar la deuda externa (*La Nación*, 09/05/88, p. 7; *Clarín*, 11/05/88, p. 9).

22. Ubaldini constituía una histórica figura combativa dentro del sindicalismo, que se había opuesto al Régimen militar del '76 y presentaba, a fines de los años '80, un discurso nacional popular radicalizado.

23. De un modo similar, el presidente español Felipe González destacaba que “cuando se han disparado lo que llaman las magnitudes monetarias, este Gobierno restringe las magnitudes monetarias (...). Si no hiciéramos esa operación, se dispararía la inflación, perderían competencia y el crecimiento de las exportaciones que se está produciendo se frenaría. Por consiguiente, habría una recesión económica (...). Este Gobierno se está tomando en serio el mantener los equilibrios económicos” (entrevista en *Página 12*, 02/11/88, p. 12).

24. Presidente del Banco Mundial, Barber Canable (*La Nación*, 17/09/88, p. 1).

25. Documento de técnicos del Banco Mundial (*Página 12*, 04/05/88, p. 2).

26. Rudiger Dornbusch y William Cline (*Página 12*, 16/08/88, p. 4).

27. Editorial de *La Nación*, “Menores estímulos para las exportaciones”, 27/08/88.

28. Editorial “Liberación de precios”, *Clarín*, 10/04/88, p. 16.

29. Editorial “Consecuencias de una política”, *Clarín*, 13/06/88, p. 10.

30. Rolando Pietrantrueno, presidente del Consejo Argentino de la Industria (CAI) (*Página 12*, 02/11/88, p. 8).

31. Benito Legerén, presidente de la CRA (*Clarín*, 23/03/88, p. 19).

32. Documento del Coloquio de empresarios de IDEA (*Clarín*, 06/11/88, p. 20).
33. Documento del Grupo de los 17 grandes grupos empresariales (*Página 12*, 28/05/88, p. 8).
34. Documento “El tiempo de la producción”, firmado por Guillermo Alchourón, presidente de la SRA (*La Nación*, 30/09/88, p. 22); Arturo Navarro, presidente de CARBAP (*La Nación*, 26/09/88, p. 8).
35. Eduardo de la Fuente, UIA (*Clarín*, 04/09/88, p. 21; *La Nación*, 26/10/88, p. 20).
36. Etchart lideraba el Movimiento Industrial Nacional (MIN), que agrupaba a medianos y pequeños industriales del interior del país, cuyos insumos se encarecían por efecto del Plan Primavera. Estos sectores criticaban la apertura comercial por sus efectos sobre el “mercado interno”. Para más detalle, véase Viguera (2000).
37. Jaime Goldeman, presidente de APYME (entrevista en *Página 12*, 29/11/88, p. 12).

Bibliografía

- M. ACUÑA (1995), *Alfonsín y el poder económico*, Buenos Aires, Corregidor.
- R. ARONSKIND (2008), *Controversias y debates en el pensamiento económico argentino*, Buenos Aires, Biblioteca Nacional-UNGS.
- J. Balsa (2011), “Aspectos discursivos de la construcción de la hegemonía”, en *Identidades*, Vol. 1, N°1, Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, pp. 70-90. URL: <http://iidentidades.files.wordpress.com/2011/03/4-identidades-1-1-2011-balsa.pdf>. Consultado: 16 de julio de 2013.
- G. BELTRÁN (2006), “Acción empresaria e ideología. La génesis de las reformas estructurales”, en A. PUCCIARELLI (Coord.), *Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- A. BONNET (2008), *La hegemonía menemista. El neoconservadurismo en Argentina. 1989-2001*, Buenos Aires, Prometeo.
- A. CASTELLANI (2002), “Implementación del modelo neoliberal y restricciones al desarrollo en la Argentina contemporánea”, en AA.VV., *Más allá del pensamiento único*, Buenos Aires, CLACSO.
- M. DIAMAND (1973), *Doctrinas económicas, desarrollo e independencia*, Buenos Aires, Paidós.
- H. FAIR (2013), “El desvanecimiento del discurso nacional-popular en la Argentina (1988-1993)”, en *Entramado*, Vol. 9, N° 2.
- I. FONTE (2008), “Un estudio pragmático del conflicto político mexicano-cubano (2004) en la prensa”, en *Discurso y sociedad*, Vol. 2.
- R. FRENKEL (1989), “El régimen de alta inflación y el nivel de actividad”, *Documentos del CEDES*, N° 26, Buenos Aires.
- M. HEREDIA (2006), “La demarcación de la frontera entre economía y política en democracia. Actores y controversias en torno de la política económica de Alfonsín”, en A. PUCCIARELLI (Coord.), *Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- D. HOWARTH (2010), *Discourse. Concepts in the social sciences*, Great Britain, Open University Press.
- M. KRİKORIAN (2010), “La hiperinflación de 1989/90”, *Anales*, Vol. 7, N° 40.
- J. LACAN (2006), *Seminario XVII: El reverso del psicoanálisis*, Buenos Aires, Paidós.
- E. LACLAU y C. MOUFFE (1987), *Hegemonía y estrategia socialista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- E. LACLAU (1996), *Emancipación y diferencia*, Buenos Aires, Ariel.
- E. LACLAU (2005), *La razón populista*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- J. LLACH (1997), *Otro siglo, otra Argentina*, Buenos Aires, Ariel.
- S. MORRESI (2008), *La nueva derecha argentina*, Buenos Aires, UNGS-Biblioteca Nacional.
- R. ORTIZ y M. SCHORR (2006), “Crisis del Estado y pujas interburguesas. La economía política de la hiperinflación”, en A. PUCCIARELLI (Coord.), *Los años de Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI.
- M. PERALTA RAMOS (2007), *La economía política argentina. Poder y clases sociales (1930-2006)*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- M. THWAITES REY (2003), *La (des)ilusión privatista*, Buenos Aires, EUDEBA.
- E. VERÓN (1995), *Semiosis de lo ideológico y el poder*, Buenos Aires, UBA.

A. VIGUERA (2000), *La trama política de la apertura económica en la Argentina (1987-1996)*, Buenos Aires, Al Margen.

Fuentes

Diarios *Clarín*, *La Nación* y *Página 12* (año 1988).

Recibido: 22/07/2013. Aceptado: 30/06/2014.

Hernán Fair, "Las disputas público-mediáticas en torno a la inflación en la Argentina pre-menemista (1988)". Revista *Temas y Debates*. ISSN 1666-0714, año 18, número 28, julio-diciembre 2014, pp. 83-104.